

Santiago, uno de julio de dos mil veinticuatro.

### **Vistos y considerando**

**Primero:** Que comparece Juan Esteban Román Uribe, en representación de la Corporación Educacional Colegio Jacques Cousteau, sostenedor del Colegio Jacques Cousteau, y deduce recurso de reclamación en contra de la Resolución Exenta PA N°000115 dictada por orden del Superintendente de Educación, de fecha 25 de enero de 2024 y notificada al reclamante por correo electrónico con fecha 30 de enero de 2024, la cual decretó una sanción de multa a beneficio fiscal de Privación Temporal Parcial de la Subvención General de un 2% por 1 mes, las que solicita se dejen sin efecto, o rebajarla conforme al mérito del proceso.

Relata que con fecha 21 de octubre de 2022 y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 20.529, interpuso recurso de reclamación en contra de la Resolución Exenta N°2022/PA/13/1990 dictada por la Directora Regional (S) Superintendencia de Educación Región Metropolitana, la cual aprobó el proceso administrativo y aplicó al recurrente una multa de 501 Unidades Tributarias Mensuales por supuestamente no aplicar correctamente su reglamento de evaluación y promoción, conforme al siguiente cargo, lo que trasgrediría el artículo 46 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N°2 del año 2009 del Ministerio de Educación:

*“Cargo N°1: Sostenedor no aplica correctamente su reglamento de evaluación y promoción.*

*Revisados los antecedentes remitidos por el establecimiento previa notificación de Unidad de Comunicaciones y Denuncias de CAS-04844, establecimiento educacional no remite ni adjunta los registros verificadores que respalden haber adoptado medidas por medio de un Plan de apoyo académico, evaluación diferenciada y/o adecuaciones curriculares en favor del estudiante de III medio B año 2021, Lucas Salamanca Campodónico con necesidades educativas especiales informadas por apoderada, tal como señala su propio "Anexo Reglamento de Evaluación y Promoción 2020" que establece: El establecimiento implementará las diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulos en caso de los alumnos que así lo requieran y que fueron derivados por los profesores jefes al Equipo Multidisciplinario. Asimismo, realizará las adecuaciones curriculares necesarias en el proceso*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSXXXXYXMPM

*de evaluación de acuerdo con las características del trastorno, dificultad, diferencia o impedimento diagnosticado (de carácter transitorio o permanente) que presente cada estudiante y a su relación con la asignatura o actividad de aprendizaje (motores, visuales, de audición y lenguaje). Considerando la Necesidad Educativa del estudiante, se realizarán cambios de actividades en las asignaturas que especifique el especialista (Inglés, Educación Física, entre otras).”*

Expresa que, en relación al cargo formulado, el establecimiento no habría remitido ni adjuntado los registros verificadores que respalden haber adoptado medidas a través de un plan académico, evaluación diferenciada y/o adecuaciones curriculares en favor del alumno Lucas Salamanca del III medio B año 2021, con necesidades educativas informadas por su apoderada. Sin embargo, según las propias orientaciones del Ministerio de Educación, se entiende por Evaluación Diferenciada el procedimiento pedagógico que le permite al docente identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares que alcanzan aquellos estudiantes que, por diferentes necesidades educativas, están en una situación temporal o permanente distinta de la mayoría. Precisa que cada colegio aplica procedimientos que, según su criterio pedagógico, permiten dar reales oportunidades educativas a los alumnos con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, la aplicación de evaluaciones diferenciadas a un alumno requiere que el apoderado presente la documentación médica, neurológica o psicológica que amerite el procedimiento, y que, sobre la base a esta documentación, el colegio, siguiendo el reglamento de evaluación y promoción, implemente una evaluación diferenciada y que el alumno asista a clases y rinda dicha evaluación.

Argumenta que se cumplieron los pasos antes mencionados, sin embargo, en el segundo semestre del año 2021, su situación cambió, debido a que el alumno tuvo una muy baja asistencia a clases, repercutiendo en su rendimiento académico, ya que bajó sus calificaciones, terminando el segundo semestre con un promedio de 3,8 y con 5 asignaturas con nota inferior a 4,0. Esta situación fue conversada con su apoderada en múltiples oportunidades, sin que la asistencia mejorase y sin que se presentara ningún documento para acreditar la existencia de un motivo que justificara la baja



asistencia a clases, la no rendición de evaluaciones y la no entrega de trabajos.

Agrega que la apoderada sostuvo diversas reuniones con funcionarios del establecimiento con fecha 3 de noviembre de 2021, en las que puso en conocimiento del colegio la situación médica del alumno, se conversó sobre su desmotivación e inasistencias y sobre su posible repitencia debido a sus reiteradas inasistencias tanto a las clases presenciales como virtuales. Posteriormente, según consta en el registro de seguimiento del estudiante, con fecha 17 de noviembre de 2021 la apoderada remitió vía WhatsApp una resolución de invalidez del alumno y un informe de medida cautelar emitido por el Juzgado de Familia, con lo cual recién en esa fecha se acreditó lo señalado por la apoderada con fecha 3 de noviembre de 2021 respecto de la situación del alumno. Con esa misma fecha, la Coordinadora del Equipo Multidisciplinario mantuvo una llamada telefónica con la apoderada, la cual comentó que el estudiante tenía un nuevo diagnóstico por lo cual le otorgaron el certificado de invalidez. Se abordó el tema de la atención por psicología y se solicitó el contacto del profesional para abordar con el estudiante el tema de la posible repitencia ya que, a pesar de las flexibilidades entregadas por los docentes, el estudiante no cumplió con ninguno de los acuerdos.

Expone que producto de la información proporcionada por la apoderada se efectuaron las coordinaciones entre distintos funcionarios del establecimiento, con el objeto de disponer los medios para que el alumno Lucas Salamanca tuviese una real oportunidad educativa y pudiese pasar de curso.

Con fecha 23 de noviembre de 2021 la apoderada del alumno sostuvo una reunión con la Jefa de UTP de Enseñanza Media del Colegio, en la cual se decidió que el alumno efectuaría su mejor esfuerzo para pasar de curso y que a partir del día siguiente asistiría al colegio para efectos de rendir las pruebas y que además se comprometía a realizar durante las tardes los trabajos pendientes. Sin embargo, a pesar de lo anterior, éste no rindió las evaluaciones los días 24 y 24 de noviembre de 2021 y con fecha 30 de noviembre de 2021 no respondió nada en la prueba que le fue cursada.

Expone que conforme la resolución exenta N°2251 de fecha 15 de diciembre de 2020 del Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, el término del año lectivo 2021 se fijó para el día 3 de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSXXXXYXMPM

diciembre de 2021, por lo cual a esa fecha debían estar todas las evaluaciones efectuadas. Recién el día 6 de diciembre de 2021 la apoderada se acercó al colegio con el objeto de conocer la situación del alumno, pero lamentablemente a esa fecha el año lectivo ya estaba cerrado. Así las cosas, y si bien es cierto el colegio adoptó las medidas para que el alumno pudiese ser aprobado, aquel no asistió a las evaluaciones programadas y en aquella que sí asistió no respondió nada.

A juicio del reclamante, no es un hecho imputable al colegio que la apoderada recién el día 17 de noviembre de 2021, haya acreditado la situación de su hijo y que una vez que se estableció un compromiso sobre las evaluaciones y trabajos pendientes, estos no hayan sido enviados al colegio en tiempo y forma.

Señala que artículo 72 de la Ley N°20.529, la prueba que se rinda se debe apreciar de acuerdo a las reglas de la sana crítica, teniendo el fiscal facultades para ponderar los medios probatorios conforme a la lógica, los conocimientos científicamente afianzados y a las máximas de la experiencia, desarrollando apropiadamente el análisis de ellos. No obstante, el Fiscal del proceso administrativo sancionatorio no consideró antecedente alguno de los presentados por el sostenedor, sin ponderarlos conforme a la sana crítica, teniendo en consideración la basta información presentada que sin duda sobresee el cargo o lo atenúa. Posteriormente, el Director Regional (S) no realizó análisis alguno de la prueba presentada, no existiendo un análisis propio de la autoridad regional.

Añade que al momento de aplicar la sanción, la autoridad no tomó en consideración los criterios señalados en el artículo 73 letra b) de la Ley 20.529 que dotan de contenido al principio de proporcionalidad. En particular, no se consideró el beneficio económico obtenido con ocasión de la infracción, la intencionalidad de la comisión de la infracción, la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, la matrícula total del establecimiento a la fecha de la infracción y la subvención mensual por alumno o los recursos que reciba regularmente.

Al respecto, la resolución recurrida, sin considerar ninguno de los antecedentes acompañados a la reclamación, resolvió confirmar el cargo formulado, lo cual a juicio del reclamante es contrario a la sana crítica, debido a que el establecimiento agotó todas las instancias para aplicar



correctamente su reglamento de evaluación y promoción, pero dicha aplicación no depende únicamente de éste sino también del apoderado y del propio alumno, lo cual lamentablemente no ocurrió en la especie, por lo cual correspondería desestimar este cargo.

Por otro lado, se alegó la aplicación de la atenuante relativa a que no ha existido intencionalidad en los hechos investigados y el recurrente no ha tenido beneficio económico (artículo 76 letra b inciso 2º Ley 20.529), la cual, a pesar de haber sido alegada, no fue ni siquiera analizada por la recurrida. Finalmente, argumenta el recurrente que existe una abierta desproporcionalidad entre la multa aplicada y la supuesta e infundada infracción, considerando las medidas adoptadas por su parte.

Pide, en definitiva, acoger el presente recurso de reclamación, dejando sin efecto la multa cursada o rebajándola al menor monto conforme a los méritos del proceso, con costas.

**Segundo:** Que, evacúa informe sobre reclamación judicial del artículo 85 de la Ley N°20.529 la Superintendencia de Educación, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Expresa que tanto en la resolución exenta que aprobó el procedimiento administrativo como en la resolución recurrida se observaron todos los antecedentes proporcionados en el proceso para determinar la infracción a la normativa educacional constatada en acta de fiscalización, indicando que no cumplió con la debida aplicación de su Reglamento Interno, lo que quedó sin contravenir dada la ausencia de medios de prueba y descargos que permitieran demostrar lo contrario y dejar sin efecto la observación constitutiva de infracción. De este modo, al no existir verificadores que permitan demostrar que el establecimiento se ajustó en su decisión a lo preceptuado en el reglamento de evaluación y promoción y a la normativa educacional aplicable, se confirmó la infracción. Así, el hecho de que la resolución recurrida no le haya sido favorable al sostenedor no significa que la autoridad regional no se haya pronunciado en razón a las reglas de la sana crítica, toda vez que en cada una de las instancias del presente procedimiento administrativo ha existido un análisis de los argumentos y la prueba aportada por el sostenedor, la cual no fue suficiente para desvirtuar los hechos infraccionales constatados por el fiscalizador en su calidad de ministro de fe.



Manifiesta que de la prueba documental allegada al proceso es posible advertir informes de funcionarios que en definitiva se analiza la situación del alumno, las reuniones sostenidas con la apoderada del mismo y el acuerdo adoptado con éste, el cual no habría sido cumplido por el estudiante, ante lo cual se justificaría la medida de repitencia. Asimismo, se hacen presentes informes de calificaciones tanto del primer como segundo semestre, Registro de Seguimiento del estudiante año 2021, en el cual se alude a flexibilizaciones mas no se establece en qué consistieron ni se envía evidencia de las mismas, Plan de Adecuación Individual de agosto del año 2019, Registro Acompañamiento Pandemia (2020) y Plan de Acción de abril de 2021, no presentándose medios verificadores que den cuenta de la ejecución de las acciones contenidas en estos documentos. A su vez, se acompaña hoja de vida en la que se contiene lo obrado respecto del alumno en los meses de noviembre y diciembre de 2021. Finalmente, se adjuntan a la reclamación copias de actividades y evaluaciones en blanco, no constando la entrega al alumno. De este modo, se valora la intención positiva del sostenedor en orden a otorgar una posibilidad al alumno para efectos de ser promovido de curso, sin embargo, correspondía efectuar un plan de apoyo académico acorde a sus necesidades desde el día en que la apoderada da cuenta de su situación de salud, posteriormente acreditada por resolución, no verificándose la existencia de evaluaciones diferenciadas, no dando correcta aplicación a su Reglamento de Evaluación y Promoción.

En cuanto a la ponderación de circunstancias atenuantes, indica que la resolución recurrida se hizo cargo de forma expresa de aquella establecida en la letra b) del artículo 79 de la Ley N°20.529, señalándolo en su considerando quinto, letra e). En consecuencia, esta alegación debe ser desestimada por cuanto se consideró la atenuante alegada por la recurrente.

Respecto de la proporcionalidad de la sanción, menciona que la sanción de privación temporal parcial de la subvención general de un 2% por 1 mes se encuentra comprendida dentro del rango legal de sanciones aplicables a las infracciones graves, de conformidad a los artículos 73 y 77 de la Ley N°20.529, por lo que, la sola aplicación de una sanción administrativa dentro del rango admitido por el legislador desde ya confirma su legalidad y proporcionalidad objetiva, desestimando un agravio indebido en este aspecto,



considerando que el cargo fue debidamente confirmado luego de substanciarse completamente el proceso sancionatorio.

Asimismo, respecto a la ponderación de los elementos del artículo 73 letra b) que permitieron determinar el quantum de la sanción, también fueron motivados, con especial mención de que la entidad sostenedora no presenta antecedentes en el transcurso del proceso que permitan desvirtuar o corregir el cargo formulado; la proporcionalidad que debe existir entre la sanción aplicada y la gravedad del hecho infraccional, en relación a los bienes jurídicos afectados; y que la proporcionalidad, además, se encuentra vinculada con los demás elementos que deben ser ponderados para graduar la sanción a aplicar, explicitados en el artículo 73, letra b), inciso segundo de la Ley N° 20.529, de los que se observa la matrícula del establecimiento, los recursos que por él percibe el sostenedor, y la concurrencia de la circunstancia atenuante de responsabilidad previamente referida.

Expresa que todo ello demuestra que la sanción fue aplicada de forma ajustada a la magnitud de la infracción, dotando de proporcionalidad y razonabilidad el acto sancionatorio.

Ante la falta de ponderación de beneficio económico y de los otros elementos del artículo 73 letra b) de la Ley N°20.529, señala que los criterios legales de determinación de la sanción se aplican de acuerdo con la naturaleza del hecho infraccional, por lo que aquellos señalados por el reclamante no pueden invocarse como un supuestos que haya incidido o pueda incidir en el quantum de la sanción.

En tal sentido, expresa, que el perjuicio que ocasiona una sanción pecuniaria es propio de la afectación del patrimonio que provoca una sanción, siendo uno de los mecanismos admitidos por el legislador para garantizar que los sujetos fiscalizados cumplan con la normativa sectorial. Por su calidad de garante de la prestación del servicio educativo, el sostenedor está sujeto al cumplimiento de la normativa del ramo en el establecimiento de su dependencia, por lo que la afectación de la sanción a su patrimonio se condice con el deber de diligencia que fue desatendido.

Pide, en definitiva, rechazar el presente recurso de reclamación, con costas.

**Tercero:** Que el extenso texto del Reclamo, que relata pormenorizadamente las gestiones, deja en evidencia que la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSXXXXYXMPM

Superintendencia consideró sus descargos y atenuantes al punto de rebajarle la sanción de multa a beneficio fiscal aplicada a solo un 2% de la Subvención General por un mes, al acoger parcialmente el recurso de reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 2022/PA/13/1990, de fecha 27 de Septiembre de 2022, en circunstancias que la originalmente aplicada era de 501 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), la que no podía ser inferior al 5% ni exceder el 50% de la subvención mensual por alumno matriculado.

**Cuarto:** Que lo anterior es determinante si se considera que la competencia de esta Corte, es determinar si los hechos denunciados por la reclamante tienen el carácter ilegal que se les atribuye, puesto que las atribuciones ejercidas por la Superintendencia reclamada, se encuentran dentro de la potestad sancionatoria que por ley dicha entidad ejerce y lo que corresponde no se hacer una ponderación del mérito sino constatar si lo decidido por el ente reclamado se ajusta o no a la legislación vigente.

**Quinto:** Que, en cuanto a la legalidad de lo resuelto por el órgano reclamado, viene al caso señalar que las multas contenidas en el artículo 73 de la Ley N° 20.529 son uno de los mecanismos para garantizar que los sujetos fiscalizados cumplan con la normativa sectorial correspondiente. .

Así entonces la Resolución reclamada ha sido dictada por autoridad competente, dentro del marco de sus competencias legales y previa investigación de los hechos denunciados, y no se advierte la concurrencia de algún vicio de legalidad que amerite la invalidación del acto administrativo reclamado.

**Sexto:** Que, en lo que respecta al quantum y naturaleza de la multa impuesta, cabe referir que se trata de una infracción de carácter grave, conforme lo dispuesto en el artículo 76, letra c), de la Ley N° 20.529. y como se adelantó, la Resolución que se reclama, rebajó la multa originalmente impuesta, al considerar concurrente la atenuante de responsabilidad regulada en el artículo 79, letra b), de la Ley N° 20.529, por no haber sido sancionado el establecimiento que había sido ponderada por la autoridad regional.

Ha de considerarse, además, que la determinación concreta de la calificación de una infracción, encuadrándola como grave, menos grave o leve, corresponde únicamente a la Superintendencia de Educación, en virtud de las facultades legales que le confieren los artículos 48 y 49 de la Ley N° 20.529, particularmente aquella del literal m) de este último artículo, de



manera que lo obrado por la Superintendencia reclamada tampoco merece reproche de legalidad en ese aspecto.

**Séptimo:** Que así las cosas, encontrándonos ante Reclamo de ilegalidad y no ante una nueva instancia, más propia de un recurso de apelación, no cabe sino concluir que carece de plausibilidad el presente reclamo de ilegalidad y será rechazado.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 85 y siguientes de la Ley N° 20.529 y 223 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve.

Que **se rechaza**, con costas, la Reclamación deducida por Corporación Educacional Colegio Jacques Cousteau, sostenedor del Colegio Jacques Cousteau, en contra de la Resolución Exenta PA N°000115 de fecha 25 de enero de 2024, dictada por orden de la Superintendente de Educación.

**Regístrese y notifíquese.**

Redacción del Ministro Sr. Hernán Crisosto Greisse

**Rol 133-2024 Contencioso Administrativo**

Pronunciada por la **Octava Sala** de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Dobra Lusic Nadal e integrada, además, por el ministro señor Hernán Crisosto Greisse y el abogado integrante señor Waldo Parra Pizarro. No firma el abogado integrante señor Parra, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSXXXXXMPM

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Hernan Alejandro Crisosto G. Santiago, uno de julio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a uno de julio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSXXXXYXMPM